

MALCOM DEAS

Un horizonte vacío

Dividida por los rebeldes, y ahora por las drogas, la democracia más antigua de Suramérica parece estar al borde de la fragmentación.

“La causa más común de la guerra es la guerra”. Alex de Waal, Index 5/1999

“Nuestros compromisos morales con lugares lejanos son notoriamente selectivos y parciales”. Michael Ignatieff, The Warrior's Honour. Ethnic War and the Modern Conscience.

Tengo ante mí la etiqueta de un tarro de café: *Waitrose's Colombian Instant*. Frente a un bosquecillo botánicamente dudoso en el que el artista ha repartido a algunos recolectores con sombreros mexicanos, aparece su idea del propietario, un hombre con barba y bigote. Viste una extravagante chaqueta con botones de latón y bordados en oro con charreteras escarlata, una especie de batín militarizado, y lleva una taza y un platillo floreados. Naturalmente, nada de esto se parece remotamente a la realidad, incluso es aún menos real de lo que aparece en las etiquetas más corrientes.

He hecho una lista (no exhaustiva) de seis personalidades colombianas que saben expresar sus ideas, a las que he conocido y que han sido asesinadas en el último decenio: tres políticos, dos profesores de universidad y un humorista. Los políticos son Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez y Bernardo Jaramillo; los profesores, Jesús Antonio Bejarano y Darío Betancourt; y el humorista, Jaime Garzón, el Cantinflas más intelectual de Colombia. Todos ellos tenían trayectorias, filiaciones políticas y antecedentes muy distintos, y todos ellos están censurados ahora por el supremo censor. En dos casos, quizá tres, hay indicios que señalan al narcotráfico, pero ni en uno sólo se puede estar totalmente seguro de quiénes fueron los autores de su muerte. En dos de los últimos tres asesinatos pudieron haber sido los paramilitares o la guerrilla, y uno pudo ser simplemente un delito común. Cabe pensar en más de una versión verosímil. Hay que tener en cuenta que a menudo es imposible que una imaginación “normal” conciba los procesos de razonamiento de unos grupos pequeños, armados, clandestinos y violentos. Las amenazas y las

Malcom Deas es miembro del Colegio de St. Anthony, de la Universidad de Oxford, y cofundador del Centro Latinoamericano de dicha Universidad. Sus trabajos se han publicado en *Del poder y la gramática* (Taurus), *Intercambios violentos* (Alfaguara) y *The Legitimation of Violence* (Macmillan, 1997). Visitó Colombia por primera vez en 1963.

Traducción: Berna Wang

acciones que silencian a la gente en Colombia proceden de muchas direcciones diferentes y podría haber motivos que uno no puede adivinar.

El pasado mes de noviembre, alrededor de dos millones y medio de personas se manifestaron en las calles de Bogotá contra la violencia; digamos que un tercio de los habitantes de la ciudad. En otras ciudades se organizaron manifestaciones de proporciones similares. Sus efectos inmediatos sobre los diversos autores de actos violentos contra los que estaban dirigidos no son tan evidentes: puede que a largo plazo tengan alguna repercusión sobre los elementos más políticos de la dirección de la guerrilla, pero no ablandarán los corazones más duros, los de los criminales que a menudo contratan los elementos políticos, o los comprometidos con la lucha armada. Quizá por ese motivo —su misma carencia de un objetivo fácilmente definible—, las manifestaciones apenas han tenido eco en el extranjero; en este país, las noticias sobre ellas sólo llegaron a los insomnes que escuchaban el Servicio Mundial de la BBC. Pero son significativas. Son protestas monumentales contra la violencia: no a favor del Gobierno, al que las encuestas dan pocos puntos; ni contra el ejército ni a favor de él, aunque ocupa un puesto algo más alto; ni a favor de la guerrilla ni de los paramilitares, ambos en puestos más bajos aún que los políticos; ni a favor de la paz a cualquier precio; ni a favor de ésta o aquella reforma; sino contra las matanzas, los homicidios, los secuestros, las desapariciones, el desarraigo y todas las expresiones de violencia que sufre el país desde hace tanto tiempo.

La etiqueta del tarro de café, la confusa lista de muertos, las enormes multitudes que no aparecen en los medios... Colombia no está tan lejos de Europa o de EE UU, pero nuestro “compromiso moral” —o, de hecho, nuestro compromiso intelectual— es como el que tendríamos con un lugar realmente muy lejano. Es como si hubiera una especie de censura. Para ciertas mentalidades, uno de los atractivos del país es que es poco conocido y poco visitado. No es un país que posea el interés estratégico que atrae a periodistas y estudiosos, por lo tanto, la cobertura informativa que recibe suele ser selectiva y parcial: drogas, homicidios, matanzas, paramilitares y guerrillas, por lo general sin contexto y con escaso reconocimiento del enorme daño que las drogas están haciendo al país, componen casi toda la errática atención que obtiene en la prensa y en los medios de comunicación británicos, con las honrosas excepciones del *Economist* y del *Financial Times*. Es totalmente imposible saber quién hace qué a quién, y por qué, o cuáles son las perspectivas del país. He aquí el panorama, la versión más desapasionada que puedo ofrecer.

Colombia es una democracia que aspira a ser reconocida como tal y lo viene siendo, con la excepción de unos años, a lo largo de sus 170 años de historia como país independiente. Por lo general, resulta fácil que quienes adoptan la retórica de los críticos locales tachen su historia democrática de fachada y de meramente formal, pero es algo más que eso. El electorado es en parte clientelístico, en parte opinión, como en tantísimas otras democracias más conocidas. Los políticos sí responden ante la opinión pública, y el sistema es capaz de producir de hecho algunas personalidades capaces y valientes: Antanas Mockus, recientemente elegido alcalde de Bogotá, es un político más interesante que cualquiera de los candidatos actualmente en liza en Londres, y sus logros no han sido desdeña-

bles. Algunas zonas del país son más democráticas que otras, pero para gobernar hay que obtener votos, y las elecciones son auténticas y competitivas. En las zonas sometidas a su influencia, la guerrilla ha aprendido a no oponerse a ellas, sino que impone promesas a los candidatos, que deben hacer campaña para sobrevivir, y manipula a los que resultan elegidos.

Los problemas del país no se derivan de la inexistencia de elecciones, de limitaciones a la libertad y a la participación impuestas desde arriba ni de la restricción por el Gobierno de las libertades políticas convencionales. Todos los protagonistas de los conflictos de Colombia aprovechan al máximo los medios de comunicación locales, tolerantes y a menudo sensacionalistas, incluso desde la cárcel. Hace poco, un equipo de televisión de Reuters filmó atentamente a los guerrilleros que hacían ejercicios de instrucción en una prisión de Bogotá, a la que es más fácil acceder que a la prisión de Maze de Irlanda del Norte. Los límites a la expresión y a la actividad política son los que impone la prudencia ante las amenazas, límites lo bastante reales.

En los años cuarenta y cincuenta, la competencia por el poder entre los dos partidos tradicionales del país, liberales y conservadores, se hizo sectaria y violenta, y surgió la primera guerrilla rural, integrada en su mayor parte por liberales. En 1957, cuando liberales y conservadores llegaron a un acuerdo para repartirse el poder para poner fin a las luchas sectarias y derrocar un efímero gobierno militar, la mayoría de los guerrilleros liberales, cuyas motivaciones eran fundamentalmente partidistas, había dejado de combatir, aunque algunos continuaron luchando bajo la influencia comunista. Éstos, que formaron el núcleo original del principal movimiento guerrillero del país, las Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana (FARC), fueron alentados por la victoria de Fidel Castro en Cuba, que también inspiró al Ejército de Liberación Nacional (ELN), actualmente la segunda organización guerrillera de Colombia. Su actividad, y la violencia en general, pareció disminuir a mediados de los años setenta, cuando los homicidios se redujeron hasta un índice de unos 20 por cada 100.000 habitantes, cifra bastante elevada, pero muy alejada de los 70 y 80 de los últimos años.

Después, la violencia comenzó a aumentar de nuevo. Los nuevos recursos para los movimientos armados llegaron de las drogas y de la intensificación de la extorsión, especialmente a la industria petrolera, y de los secuestros. También recibieron alguna nueva inspiración de los acontecimientos revolucionarios de Centroamérica. El apoyo popular era irrelevante. Los frentes se multiplicaron, la “presencia” en los municipios se extendió más, aunque las cifras habituales —“un tercio del país”, o más, según el gusto de cada uno— no transmiten que la presencia de la guerrilla se concentra en las zonas menos pobladas del país. Las FARC podrían contar con alrededor de 20.000 guerrilleros, algunos más militantes que otros, y el ELN con unos 7.000. En los años ochenta, surgieron varios grupos paramilitares antiguerrilla, cuyos elementos se calculan actualmente en unos 5.000. Colombia tiene una población de más de 41 millones de habitantes.

Con unas cifras más reducidas, se habría podido hacer una reseña similar hace diez o incluso veinte años. Los intentos de lograr la paz llevan también mucho tiempo en marcha: la serie actual, iniciada, frustrada y rota, dado que los gobiernos elegidos por las urnas cambian cada cuatro años, debe remontarse

hasta la administración del presidente Julio César Turbay, que ocupó el cargo desde 1978 hasta 1982. Los esfuerzos del presidente Andrés Pastrana, novedosos en algunos de sus aspectos, son sólo los más recientes de una larga línea de negociaciones intermitentes. Con algunos grupos más pequeños incluso han tenido éxito.

La historia es esencial, tan esencial para comprender a la guerrilla y a los paramilitares colombianos como para comprender Irlanda del Norte, otro conflicto de difícil solución con el que estamos más familiarizados y que, en algunos aspectos, es similar. La dirección de la guerrilla está tan obsesionada con la historia como cualquier aplicado paramilitar del Ulster o miembro del IRA provisional encarcelado. Una obra de reciente publicación en Bogotá tiene el atractivo título de *Las verdaderas intenciones de las FARC*. Hay que comprarla, sólo por si cumple su promesa, pero resulta que es casi todo historia: los orígenes de la lucha, la versión oficial del grupo guerrillero sobre quién hizo qué en los años cincuenta y sesenta. No expone gran cosa de su programa, su proyecto, su política. El conflicto que contiene trata del conflicto; la causa de esta guerra es la guerra.

El logro de las FARC es su historia, su supervivencia, su crecimiento y su organización, que ahora es fundamentalmente militar y logística, y sigue representada en buena parte por su veterano líder Manuel Marulanda, activo desde los años cincuenta. Obviamente, necesita muchos ingresos y, en consecuencia, ha adquirido grandes participaciones. Las cifras sobre el porcentaje de dinero que recauda a través de los impuestos, el fomento y la protección del negocio de la droga varían; el 38% es el cálculo más bajo que he visto, pero esta precisión no debe tomarse al pie de la letra ya que existen otros cálculos muy superiores. Las FARC siempre señalan que no son los únicos que ganan dinero con este negocio. Las declaraciones políticas del movimiento son escasas y poco interesantes. Tiene un programa de diez puntos, revisado por última vez en 1992, pero está lleno de clichés y poco inspirado al que nadie, dentro y fuera de la organización, dentro y fuera del país, presta mucha atención. La opinión pública colombiana siempre está dispuesta a criticar y, por tanto, hay muchas razones por las que bien vale la pena no tener un gran programa: si no hay programa, no pueden criticarlo.

Así pues, como dicen en el librito: “No tenemos mucho que negociar”. La postura del movimiento en las actuales negociaciones de paz —y la del ELN es similar— es presionar con la violencia y supervisar y aprobar mientras va surgiendo de alguna forma la “nueva Colombia” mediante un proceso de consulta popular. Cuando el 90% —el porcentaje es suyo— de la indefinida nueva Colombia esté en marcha, considerarán la posibilidad de dejar de combatir. El desmantelamiento no está siquiera en el horizonte lejano.

Son muchos los problemas y muchas las razones ocultas. La guerrilla no tiene la autoridad moral ni el apoyo popular suficientes para respaldar el papel que se adjudican a sí mismos; algunos dan la explicación revolucionaria de que la popularidad llega después de tomar el poder, no antes. Los paramilitares contestan a sus pretensiones con violencia, aterrorizando y expulsando a la población en las zonas que consideran que están bajo la influencia de la guerrilla, y el Gobierno, que hace demasiadas concesiones a la guerrilla, provoca el aumento de activi-

dad por parte del bando paramilitar. Dejando aparte la cuestión de cuántos dirigentes de la guerrilla desean convertir el capital militar adquirido, en capital político, los líderes que así lo desean se enfrentan a la dificultad de imaginar cómo hacerlo, y a las graves tensiones que sufre todo movimiento armado cuando realiza un cambio de esta clase, o incluso cuando acuerda una tregua.

Si alguien avanza demasiado rápido, será acusado de traicionar al movimiento, su historia, su legado, sus muertos. La disciplina y la moral dependen en cierta medida de los combates, o al menos de la perspectiva de combatir —como en muchas guerras de este tipo, durante largos periodos, en la mayoría de los lugares no pasa gran cosa— y es difícil mantener la disciplina y la moral mientras durante una tregua se espera a ver qué ocurre. Los recursos provienen de las drogas, de la extorsión y de los secuestros. No son actividades para realizar en tiempo de paz: ¿de dónde vendrán, en la paz, recursos similares? Algunos dirigentes tienen más talento y perspectivas políticas que otros, aunque, en general, el talento político es más bien escaso. Después de tantos años y de tanta historia, la desconfianza en el ejército es visceral y cualquier cambio en la modalidad de actividad política exigirá, obviamente, unas garantías minuciosas y costosas.

Las FARC nos recordarán lo que sucedió con su rama política, la Unión Patriótica (UP), cuando a mediados de los años ochenta siguió la doctrina imposible de “la combinación de todas las formas de lucha”, las pacíficas y las violentas, hasta la arena electoral: muchos de sus miembros fueron asesinados. (Las FARC no nos recordarán los aspectos más turbios de ese episodio, que incluyeron la rivalidad y la enemistad con los intereses de la droga, ni que entre los políticos muertos en aquellas fechas también había muchos representantes de otros partidos). Los guerrilleros tienen muchísimos enemigos, y buena parte de ellos son merecidos.

Aunque los guerrilleros, como el ejército, exageran continuamente sus victorias militares, no se sienten actualmente muy presionados para negociar, y obviamente muchos están encantados de que las cosas continúen tal como están.

¿Cómo puede ser desapasionado el relato de esta situación? La mayoría de los escritores, con independencia de lo que crean que están haciendo, intentan despertar simpatías —en su mayor parte para las víctimas no combatientes y los desplazados, algunos para la guerrilla, otros contra los paramilitares, otros contra la intervención y la presión externas— criticando la nefanda política estadounidense sobre la droga —algunos a favor de ella—, afirmando que “hay que hacer algo”, buscando la atención benévola de la “comunidad internacional”.

Lo que hay que hacer es crear un Estado más eficaz, y eso significa mejorar la justicia —en el sentido más básico y antiguo, y no en el social— y hacer que las fuerzas del orden sean más eficaces, y eso significa fuerzas armadas y policía: en última instancia, lo que reduce a los señores de paramilitares la guerra y a la guerrilla es la fuerza del Estado.

Colombia no cuenta con una tradición autoritaria, e históricamente ha tenido gobiernos débiles y unas estructuras administrativas muy escuetas. La tendencia nacional es a buscar soluciones en acuerdos políticos, no a crear instituciones más fuertes, para las cuales no existieron recursos durante buena parte de la historia del país. Esta tradición de gobiernos débiles persistió incluso cuando hubo

*Lo que hay
que hacer es
crear un
Estado más
eficaz, y eso
significa
mejorar la
justicia*

más recursos, siguiendo de algún modo la línea italiana: la pobreza ya no es la explicación que justifica las peculiaridades del gobierno italiano.

Ha habido algunas señales de progreso y de mayor lucidez en este sentido. Hay que crear un Estado más eficaz, se llegue o no a acuerdos entre los combatientes, dado que los acuerdos por sí solos no proporcionarán las garantías necesarias. Un Estado más eficaz podría facilitar esos acuerdos. Una política de derechos humanos para Colombia, en EE UU o en la Unión Europea, debería tener alguna posibilidad de mejorar las oportunidades para estos derechos, y es dudoso que la mejor forma de alcanzar ese fin sea el tratamiento de paria que algunos recomiendan y que bien podría empeorar la situación. Sin un Estado más eficaz, todos los que intentan hacer algo, como hicieron, en sus diferentes estilos, las seis personas de mi lista, seguirán jugándose la vida.